

Julio 2012

ANÁLISIS DE GREENPEACE DE LAS PROTESTAS DEL SECTOR MINERO POR LOS RECORTES EN LAS AYUDAS AL CARBÓN

Hablemos de carbón, sin tabúes

El sector del carbón está en huelga indefinida desde que el Gobierno recortara las ayudas a la minería. Una huelga acompañada de marchas y actos de protesta que han tardado veinte días en llegar de una forma más o menos generalizada a los medios. Y no es de extrañar: el del carbón es un conflicto complejo, con muchos matices e intereses ocultos y, por lo tanto, con muchos tabúes de los que unos no quieren y a otros no les dejan hablar. Vayamos por partes...

El carbón español y europeo es un recurso finito, difícil de extraer y, en la mayoría de los casos, poco eficiente. Se mantiene gracias a la presión política que ejercen los empresarios mineros y las grandes eléctricas dueñas de las centrales térmicas de carbón, una presión que ha culminado en un régimen de ayudas que falsea la competencia en el mercado eléctrico colocando a otras fuentes energéticas en clara desventaja.

En el contexto de cambio climático en el que nos movemos, las ayudas al carbón están destinadas a desaparecer. Los expertos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) coinciden en que el abandono de las subvenciones a los combustibles fósiles es necesario para reducir emisiones de forma rápida y liberar fondos para la promoción de las tecnologías limpias. Algo a lo que ya se comprometió el G20 en su reunión celebrada en Pittsburg en el año 2009 y que se ha traducido en la normativa europea de ayudas a la minería del carbón aprobada en 2010 tras una intensa presión por parte del sector carbonero que, amparado por los gobiernos de países como España o Polonia, consiguió desplazar la fecha de cese definitivo de las ayudas de 2014 a 2018.

A pesar del aplazamiento del final de las ayudas a la minería del carbón, la normativa europea ha mantenido algunas de las condiciones propuestas por la Comisión Europea para garantizar el progresivo abandono de los combustibles fósiles en la UE, entre las que se encuentra la necesidad de que las ayudas se reduzcan de año en año y se destinen a actividades de cierre o reconversión recogidas en planes estratégicos nacionales que los estados miembros debían presentar en Bruselas. Además, la normativa dispone que las minas que quieran continuar su actividad a partir de 2019 en adelante y hayan recibido ayudas deberán devolverlas.

La realidad confirma la tendencia al cierre de la minería del carbón cuyo sector se ha reducido drásticamente en los últimos veinte años, pese a las subvenciones, pasando de 234 empresas y 42.806 trabajadores en 1990 a 15 compañías y 4.000 trabajadores en la actualidad.

El plan de cierre de la minería enviado por el Gobierno español a Bruselas prevé, para 2012, un recorte de las ayudas del 10% respecto a las cantidades otorgadas en 2011, sin embargo, el recorte operado en los Presupuestos Generales del Estado contempla una reducción práctica de entorno al 60%. Lo criticable, por lo tanto, no es que el Gobierno reduzca las ayudas al carbón, una de las pocas medidas de política energética que encajan con lo que pide que hagamos la Comisión Europea, sino que lo haga drásticamente, sin una política energética definida y sin acompañarlo de una buena estrategia de reconversión. Un estilo, el del golpe de tijera, al que ya nos tiene acostumbrados el actual Gobierno desde que a primeros de año aprobara la moratoria a las primas a las renovables y que nos ha llevado a tener, en estos momentos, doble frustración, doble incertidumbre y doble angustia: la del sector de las energías limpias, capado justo cuando se perfilaba como una de las claves para la recuperación económica, y la del carbón que, debiendo asumir su muerte inminente, debería poder contar con los fondos y los planes de reconversión adecuados que garanticen el futuro de sus trabajadores.

Es difícil creer que el minero prefiera que sus generaciones futuras pasen los días a 500 metros bajo tierra a la reconversión y si insiste en perpetuar las subvenciones a la explotación es por la escasa confianza generada por los desastres que hasta ahora se han hecho con los fondos de reconversión. La patronal del sector y los sindicatos se unen para pedir que no se recorten las primas a la explotación, instrumentalizando unos y otros al minero pero obviando su única opción de futuro: abordar seriamente y de una vez por todas un proceso de reconversión. O incluso peor: proponiendo, como recientemente ha hecho Carbunión, la patronal del sector, que se aumente la dotación de ayudas a la explotación detrayendo fondos de las partidas destinadas a nuevas infraestructuras para las comarcas mineras (que dispondrá este año de unos 101,6 M€) y la de ayudas al establecimiento de nuevas empresas y generación de empleo (unos 39 M€) recogidas en el Plan del carbón.

Intereses interpuestos de los empresarios mineros, malas gestiones de los fondos de reconversión a todos los niveles y la torpeza de los sucesivos Gobiernos y de los sindicatos nos han llevado a esta situación, pero que el problema se nos eternice es muy diferente a decir que no tiene solución.

Está claro que estamos ante un sector que tiende a desaparecer no sólo por causas económicas sino por imperativo de la política climática europea. Cuando en 2018 cesen las ayudas, muchas de las explotaciones mineras españolas van a echar el cierre y esto es algo que debemos dejar de omitir.

El carbón no es una reserva estratégica para España, ni energética ni económicamente, porque a pesar de las subvenciones que sustentan el carbón nacional, la mezcla entre éste y el importado no superó, en 2011 el 15% del mix. El sistema eléctrico español ha llegado a funcionar prácticamente sin carbón en los últimos años y fue precisamente ese hecho el que en lugar de culminar en planes estratégicos para reconvertir el sector cuanto antes desencadenó en el actual Real Decreto que subvenciona la quema de carbón nacional en las centrales térmicas, aprobado para forzar la entrada del carbón nacional en el mix energético y prorrogar, artificialmente y a elevado coste, el negocio de los empresarios mineros. Algo que ni siquiera ha servido para evitar que se siga quemando carbón importado, algunas veces fraudulentamente, al amparo de la subvención al carbón nacional.

En cualquier caso, el uso actual de carbón para la generación eléctrica en España puede ser fácilmente sustituido por fuentes renovables que hoy cubren un 33% de la demanda pero que, según los expertos climáticos, deben entrar exponencialmente hacia mitad de siglo, porque para entonces el sistema 100% renovables será el único que ambiental y económicamente nos podremos permitir. Algo que ha quedado demostrado para España en sucesivos informes de Greenpeace como el “Renovables 100%”, en el que se analizaba la viabilidad técnica y económica de un sistema eléctrico basado exclusivamente en fuentes de energía renovable, y el “Energía 3.0”, presentado en septiembre de 2011 y en el que se amplía el análisis a la totalidad del sistema energético.

El problema del carbón tiene solución, pero ésta no pasa por centrar los esfuerzos en seguir subvencionando la extracción y la quema de carbón. Las ayudas a la minería deben ir desapareciendo por imperativo europeo y además de asegurarnos que el proceso se hace de forma progresiva y no a base de hachazos, es esencial desviar el peso de los esfuerzos hacia la reconversión. Ignorar que el sector está destinado al cierre y no reconvertirlo a tiempo es hacer un flaco favor al minero y condenar a las cuencas mineras al paro generalizado en 2019 y al éxodo rural.

Hay vida después del carbón y hay multitud de ejemplos, alguno en España y muchos más en otros países, que demuestran que es una vida mejor. Estamos a tiempo de asegurar el futuro de las cuencas mineras, pero para ello hay que:

- Planificar una reducción progresiva y garantista de las ayudas hasta 2018.
- Destinar la mayor parte de recursos a abordar de forma urgente la reconversión.

Siempre, pero aún más en momentos de crisis, es esencial establecer una política energética a largo plazo, coherente con las recomendaciones europeas de integrar en la recuperación económica la variable climático-energética y, en general, ambiental. Para frenar el cambio climático y la crisis económica, pero también porque la única economía posible en el futuro es la verde y a la que España, país productor de tecnología renovable, tiene mucho que aportar.